

254

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO – ORALIDAD
CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

EJECUTIVO LABORAL: 2014-00451

**AURA MARIA GARZON VIVAS vs UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL - UGPP**

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017)

Transcurridas las etapas dentro del proceso ejecutivo, entre ellas la audiencia establecida en el artículo 372 del C.G.P., y, encontrándose el expediente para revisar la liquidación del Crédito, este Despacho decretó de oficio la práctica de dictamen pericial en aras de determinar el valor del crédito a reconocer, por lo que se ordenará a la secretaría de este Despacho Judicial, dar aplicación al artículo 231 del C.G.P., en lo que corresponda.

Ahora y, frente a la petición presentada el 22 de septiembre de 2017 (fol. 252) por la perito posesionada sobre honorarios por servicios definitivos, se le informa que el pronunciamiento se efectuará en la etapa que corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE


**ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ**

CATC

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCION SEGUNDA

EL AUTO ANTERIOR SE NOTIFICA A LAS PARTES EN ESTADO ELECTRONICO
No. 35, A TRAVES DE LA PAGINA WEB WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, HOY
02 OCT 2017 DE DOS MIL DIECISIETE (2017), A LAS 8:00 A.M.


SECRETARIO

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTA
SECCION SEGUNDA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

2014-00451

CUADERNO DE MEDIDAS CAUTELARES

**AURA MARIA GARZON VIVAS vs. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL -UGPP.**

Ingresa el presente proceso interpuesto por la señora AURA MARIA GARZON VIVIAS en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP, con recurso de reposición presentado contra el auto de fecha 2 de junio de 2017, a través del cual, se niegan medidas cautelares,

I. DEL RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO.

Estando dentro del término de ejecutoria del auto que niega medidas cautelares, el apoderado judicial de la actora presenta recurso de reposición solicitando para el efecto decretar la medida cautelar requerida, decretando para este efecto el embargo y retención de los dineros en la proporción que por Ley le corresponda a la UGPP, en las cuentas que tiene en el Banco Popular N° 110-026-00137-0 destinada para gastos personales; 110-026-00138-8 destinada para gastos generales; 110-026-00140-4 destinada para gastos de caja menor; 110-026-00168-5 destinada para dirección de parafiscales y pago planilla pila, lo anterior teniendo en cuenta que los recursos depositados en dichas cuentas no corresponden al régimen de prima media con prestación definida, al Fondo de Solidaridad pensional o Bonos Pensionales, toda vez que el pagador de tales recursos es el Fondo de Pensiones Públicas "FOPEP", los que corresponde al presupuesto General de la Nación, pero que a su vez están exceptuados de su inembargabilidad y permiten, la medida cautelar solicitada.

68

Para sustentar la solicitud de medida cautelar presentada trae a colación las sentencias proferidas por la honorable Corte Constitucional que se describen: C-1064 del 11 de noviembre de 2003, donde se trataron las sentencias C-546 de 1992, C-103 de 1994, C-354 de 1997 y C-793 de 2002, que trataron la excepción de inembargabilidad de los recursos del presupuesto público.-

Que si bien le asiste razón al Despacho en aplicar la Ley 1564 de 2012, el precedente Jurisprudencial de la Corte Constitucional se aplican a hechos que perduran en el futuro de expedición de normas con posterioridad a la fecha en que se dictó el precedente, siempre y cuando los motivos que originaron dicho precedente se sostengan o no cambien en el futuro al que se expide dicha ley.

En estos términos considera el libelista que al presente asunto debe ser aplicable la amplia jurisprudencia Constitucional y, reponer el auto anterior, para en su defecto decretar las medidas cautelares solicitadas.

II. DEL TRÁMITE DEL RECURSO DE REPOSICION:

El recurso de reposición presentado por la parte actora el 12 de junio de 2017, fue fijado en lista por un día (fol. 65), corriéndose traslado por el término de tres días, término dentro del cual, no se obtuvo pronunciamiento alguno de los demás intervinientes en el proceso.

III. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

En auto que antecede, se negaron las medidas de embargo solicitadas por la parte ejecutante por cuanto sobre los dineros que recae la cautela son de aquellos que por expresa disposición legal son inembargables.

Considera el libelista que las cuentas del Banco Popular N° 110-026-00137-0 destinada para gastos personales; 110-026-00138-8 destinada para gastos generales; 110-026-00140-4 destinada para gastos de caja menor; 110-026-00168-5 destinada para dirección de parafiscales y pago planilla pila, son

cuentas embargables conforme a la jurisprudencia constitucional, además porque la UGPP, no tiene a cargo el pago de prestaciones del régimen de prima media con prestación definida, labor que corresponde al Fondo de Solidaridad pensional o Bonos Pensionales, toda vez que el pagador de tales recursos es el Fondo de Pensiones Públicas "FOPEP"; sobre este aspecto reitera el Despacho, tal y como fue considerado en auto de fecha 2 de junio de 2017 (fls. 46 al 51), el que fue expedido con toda documentación necesaria para ello, que las cuentas antes referidas por expresa disposición legal son inembargables.

Así dentro del expediente obra oficio N° 933-02671-17 de fecha 4 de abril de 2017 (fls. 40 al 41), expedido por el Banco Popular donde remite certificación de inembargabilidad de dichas cuentas, donde además se indica "Que las cuentas corrientes bancarias autorizadas a nombre de la UGPP" "Son utilizadas de forma exclusiva para depositar los recursos que la Dirección del Tesoro Nacional asigna a la Entidad para el pago de los impuestos nacionales y distritales que se generan por deducciones practicadas a los proveedores y contratistas a título de retención en la fuente, a título de retención de IVA y a título de retención de ICA. De igual forma se trasladan a esta cuenta los recursos destinados al pago de Seguridad Social de los funcionarios de la UGPP y las deducciones que autorizan efectuar de sus pagos de nómina con destino a cuenta de Ahorro de Fomento a la Construcción AFC, Aportes Voluntarios a Fondos de Pensiones y descuentos de Libranzas" "Todos los pagos y obligaciones derivados de la operación funcional de la UGPP son pagados directamente y de forma exclusiva por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a favor de cada tercero por cuanto el total del presupuesto asignado a la entidad corresponde a Recursos Nación del Presupuesto Nacional con Situación de Fondos", estas son las razones que sostienen la inembargabilidad de las cuentas referidas, entre otras cosas porque los recursos depositados en ellas, son para cubrir el pago de la Seguridad Social de los funcionarios de la UGPP.

Ahora bien, ciertamente la H. Corte Constitucional había direccionado tres excepciones sobre las cuales podían recaer las medidas cautelares aquí invocadas, a través de las sentencias de la Corte Constitucional C-1064 de 2003 y, la sentencia C-793 de 2002; **sin embargo, debe recordarse que la**

jurisprudencia como la doctrina son medios auxiliares del derecho que no pueden sobreponerse a la Ley o la Constitución y, en este caso, existe una nueva regulación que insta una prohibición sobre la inembargabilidad de cierto tipo de cuentas, además tal y como fue manifestado por el ejecutante el precedente Jurisprudencial de la Corte Constitucional se aplica a hechos que perduran en el futuro de expedición de normas con posterioridad a la fecha en que se dictó el precedente, **siempre y cuando los motivos que originaron dicho precedente se sostengan o no cambien en el futuro al que se expide dicha ley, los cuales como ya se dijo y se reitera cambiaron con el tiempo con la expedición de la Ley 1437 de 2011 y 1564 de 2012.**

Recordemos que el artículo 594 del Código General del Proceso, establece que los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales son inembargables; al respecto, el citado artículo estableció:

ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

2. Los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito, en el monto señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de créditos alimentarios.

3. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje. Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.

4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas.

5. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

71

6. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes respectivas. La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados.

7. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios.

8. Los uniformes y equipos de los militares.

9. Los terrenos o lugares utilizados como cementerios o enterramientos. 10. Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano.

11. El televisor, el radio, el computador personal o el equipo que haga sus veces, y los elementos indispensables para la comunicación personal, los utensilios de cocina, la nevera y los demás muebles necesarios para la subsistencia del afectado y de su familia, o para el trabajo individual, salvo que se trate del cobro del crédito otorgado para la adquisición del respectivo bien. Se exceptúan los bienes suntuarios de alto valor.

12. El combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la persona contra quien se decretó el secuestro y de su familia durante un (1) mes, a criterio del juez.

13. Los derechos personalísimos e intransferibles.

14. Los derechos de uso y habitación.

15. Las mercancías incorporadas en un título-valor que las represente, a menos que la medida comprenda la aprehensión del título.

16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.

PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar. En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue

intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.

En virtud de lo anterior, la misma norma previene en el parágrafo a los funcionarios judiciales o administrativos de decretar medidas cautelares sobre los recursos inembargables sin que obre un fundamento legal, recalcando nuevamente tal y como fue considerado en auto atacado, que el Despacho acoge lo dispuesto en la norma procesal expedida – Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del proceso y se dictan otras disposiciones”, porque es una norma posterior al precedente Jurisprudencial de la Corte Constitucional y, en estos momentos, se han consolidado situaciones totalmente diferentes a las contempladas en aquella oportunidad por la Corte Constitucional en las sentencias a las que se refiere la parte actora en su escrito. Conforme a todo lo manifestado se mantendrá la decisión tomada en auto de fecha 2 de junio de 2017, que negó las medidas cautelares solicitadas.

Por lo expuesto, EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA EN ORALIDAD.

RESUELVE:

PRIMERO. NO REPONER el auto de fecha 2 de junio de 2017, a través del cual, se negaron las medidas cautelares dentro del proceso de la referencia, conforme a lo manifestado a lo largo de esta providencia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA

JUEZ